

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00335-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** identificada con C.C 52.531.488 contra la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA** –Faculta de Psicología, Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria.

ANTECEDENTES

La ciudadana **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** identificada con C.C 52.531.488 inicia acción de tutela contra la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA** – Faculta de Psicología, Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria, por considerar que se le está vulnerando los **DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN, PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que está inscrita a la maestría de psicología comunitaria, cursando tercer semestre, por el que pago un valor de \$4.325.800, el 20 de agosto de 2020.

Que la maestría se lleva a cabo a distancia, debiendo los estudiantes auto capacitarse a través de la plataforma de la universidad, mediante la cual se establecen, temas, cronogramas, foros, se presentan trabajos y se hacen las pruebas necesarias para adelantar los estudios, por lo que, sin el acceso a dicha plataforma no se puede adelantar los estudios, además, establece los términos para la presentación de los trabajos, intervenciones, foros y evaluaciones.

Manifiesta que ha tenido inconvenientes con las siguientes asignaturas mediación cultural, comunidad contextos sociales, modelos de intervención en PS, psicología e intervención de grupos y colectivos.

Indica que la Universidad no dicta clase solo tutorías y apoyo técnico para el adecuado funcionamiento de la plataforma, teniendo que resolver oportunamente las dudas y necesidades de los estudiantes, dentro de un plazo de tres días máximo.

Que iniciaron clase el 26 de agosto de 2020, y desde el comienzo de semestre ha tenido problemas con varias materias, pues no poder acceder a la plataforma ha impedido que se entere de los temas, trabajos, plazos para las pruebas a desarrollar en cada una de ellas; y

para el 08 de septiembre de 2020, la plataforma no le permitió el acceso, dejándola sin la posibilidad de continuar con el desarrollo de sus estudios.

Señala que ha enviado solicitudes a través del correo electrónico, además de derechos de petición a la facultad, dirección de la maestría, tutores y apoyo técnico de la plataforma, tutores, dirección de la maestría, y demás funcionarios de la UNAD, quienes se niegan a cumplir con su labor y de manera arbitraria con una respuesta proforma le dijeron que no restituían términos, debía comunicarse con los tutores, e ir haciendo los trabajos, sin que se haya tenido en cuenta que no ha podido acceder a la plataforma para enterarse del tema a desarrollar.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales **A LA EDUCACIÓN, PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA** de la ciudadana **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** identificada con C.C 52.531.488 y se ordene a la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**, permitir el libre acceso a la plataforma y el mantenimiento oportuno para poder acceder de manera permanente.

Por otra parte, se restablezcan los términos para poder desarrollar todas las pruebas, participaciones en foros y evaluaciones, que no se han podido presentar de las asignaturas mediación cultural, comunidad contextos sociales, modelos de intervención en PS, psicología e intervención de grupos y colectivos, de manera que no se crucen con los demás trabajos que se siguen por cuanto los términos serán irrisorios.

Finalmente, que se reconvenga a las directivas, tutores y funcionarios de apoyo a cumplir con sus deberes funcionales frente a los alumnos de la maestría.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Recibo de pago.
- Derecho de petición de fecha 08/09/2020.
- Solicitud del 02/09/2020.
- Pantallazo asesoría virtual del sistema de atención al usuario.
- Respuesta 15 de febrero de 2020.
- Derecho de petición del 17/09/2020.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 29 de septiembre de 2020, se ordenó la notificación a la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**- Faculta de psicología – Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 30 de septiembre de 2020, se notificó a la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**- Faculta de psicología – Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**- Faculta de psicología – Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria, allego contestación dentro de término legal correspondiente.

CONTESTACIÓN UNIVERSIDA NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

Refirió: “(...) Señor Juez, no hay merito en estos momentos para dispensar el amparo solicitado a través de este medio, pues el motivo que dio origen a esta acción es la negativa de la estudiante para continuar con su proceso de formación, y su errada interpretación de los procesos académicos, los cuales han estado ajustados a derecho (...)”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, la ciudadana **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** identificada con C.C 52.531.488, está legitimada por activa atendiendo el postulado constitucional que antecede, aunado a lo anterior ser titular de los derechos fundamentales que se encuentran según su dicho vulnerados.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA** es una universidad pública, estatal de carácter nacional, es financiada por el estado colombiano y por recursos propios, además, es a quien se le atribuye vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que la accionante los días 02,08,17 de septiembre de 2020, elevó derecho de petición, posteriormente, elevó acción constitucional, dejando transcurrir un tiempo prudencial para impetrar la presente acción constitucional; por lo que se considera que este requisito está superado.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección de los **DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN, PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA** y es la vía que encuentra la accionante para asegurar su ejercicio.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos¹¹⁶, de manera que se garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. (Sentencia T-543/17).

DERECHO A LA EDUCACIÓN.

El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. (Sentencia T-743/13).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta juzgadora determinar si la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA**, vulneró los **DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN, PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y DEFENSA** al no proceder a dar contestación de forma y de fondo a los derechos de petición presentados el 08 y 17 de septiembre de 2020.

Con el escrito de tutela se arrimó, derecho de petición, del 08 de septiembre de 2020, dirigido al correo electrónico "sopORTE.compUS@unad.edu.co", del que se lee: " (...) solicitó una prórroga para entregar los trabajos por cuanto no me permitió ingresar al curso para efecto de entregar las actividades. Lo anterior por las inconsistencias técnicas en la plataforma del campus virtual".

Obra contestación, con fecha del 15 de septiembre de 2020, desde el correo "jose.saavedra@unad.edu.co" dirigido a "erika_idarraga@yahoo.com.mx" del que se lee: "(...) para poder solicitar el tiempo de prórroga en la entrega de sus trabajos es necesario que envíe a cada tutor de cada curso, un correo interno con las respectivas evidencias de su situación. Ellos revisan su caso y darán respuesta (...)".

Se anexo derecho de petición dirigido a soporte campus virtual, el 17 de septiembre del 2020, de que se lee: "(...) ante la grave situación solicito el aplazamiento del semestre para poder ingresar normalmente y en las mismas condiciones que mis compañeros o que me den por favor alguna solución inmediata.

Lo anterior por las inconsistencias técnicas en la plataforma del campus virtual".

Por parte de la UNAD se arrimó a la instancia constitucional escrito enviado por Jhon Gregory Belalcazar (en lo pertinente) Erika Janneth Idarraga Herrera, con fecha del 26 de septiembre

de 2020; del que se lee: “(...) la presente es para comunicarles de manera urgente que estaba realizando registro y hasta la fecha de hoy no tengo ningún ejercicio a su nombre, ni mensajes pidiendo tiempo o retroalimentación o pidiendo entrega.

Quedo atento a que me comunique la situación que están viviendo, dado que ya toca centralizar las notas y no se podría cambiar después, si tiene en trabajo, mándelo en 2 días máximo, y ahí empiezo a centralizar. Skype:jgregorybelalcazar. Jhon Gregory Belalcazar.Tutor”.

De las anteriores actuaciones, se advierte por el Despacho que en la contestación dada a **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** el 15 de septiembre de 2020, se le indicó que para dar curso a la solicitud de prórroga en la entrega de sus trabajos era necesario enviar a cada tutor de cada curso, un correo interno con las respectivas evidencias de su situación; no obstante lo anterior, por parte de la accionante no se allegó a esta instancia constitucional evidencia documental que acredite que envió los correos a los tutores de las áreas, lo que si se advierte es que nuevamente envía derecho de petición dirigido a soporte campus virtual, actuación que desdibuja la vulneración a los derechos que alude como vulnerados.

Aunado a lo anterior, con la contestación de la acción tutelar, se advirtió: “(...) en todos los cursos se evidencia que la estudiante entro, consulto el contenido, en algunos de ellos con mayor actividad que otros, no se encontró referencia de correos internos enviados por la estudiante al tutor, así como no se evidencio en el foro de dificultades técnicas, ni tampoco ninguna referencia al respecto, así como ninguna interacción por otros medios como WhatsApp, ni Skype.

(...) Debemos reiterar que, tal y como se puede evidenciar en la bandeja de entrada de cada curso y en el correo de la maestría y de la líder nacional del programa, no se cuenta con ninguna comunicación por parte de la estudiante que refiera dificultad de acceso a la plataforma, en los casos cuando el estudiante no se presenta actividades se le llama a su teléfono y en este caso refiere que uno de ellos está siempre apagado y el otro no le ha contestado a los tutores, es decir, que no es cierto el argumento de la estudiante, pues de ser así habría enviado las evidencias respectivas.

(...) se advierte señor Juez que, en todos los casos cuando el estudiante presenta dificultades de campus se reprograman las acciones para su entrega en los tiempos necesarios, así como el cuerpo de profesores se dispone a acompañar al estudiante en estos casos, (...) se considera mejorar por parte de la estudiante los canales de comunicación, pues ante una dificultad de este caso existen muchos mecanismos que tiene dispuesta la UNAD para su atención como lo son:

1. Correo del curso.
2. Foro de dificultades curso
3. Correo de líder de programa maria.triana@unad.edu.co
4. Celular de Lider del programa (es conocido por los estudiantes se da en los procesos de inducción).
5. Correo del programa maestria.psicologiacomunitaria@unad.edu.co
6. Sistema de atención al usuario.
7. Skype Maestría: maestrispsicologiacomunitaria
8. Skype Líder de programa: unadper-coorpsicologia

9. Correo líder zonal
10. Correo registro y control del centro
11. Correo soporte.tecnico@unad.edu.co.

De lo anterior, se prueba que la accionante no puso en conocimiento la dificultad presentada respecto al acceso de la plataforma a su tutor, tampoco recurrió a los canales directos que autoriza la Universidad al cuerpo estudiantil, tal y como lo había hecho en anterior oportunidad a través de derecho de petición presentado a la líder del programa, y el que fue resuelto dentro del término legal oportuno.

En virtud de lo anterior, el Despacho considera que no existe vulneración de los derechos invocados por la actora, agregándose que lo que está en controversia obedece a tramites netamente administrativos, contando la peticionaria con las acciones administrativas pertinentes para resolver el conflicto y cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, el mecanismo Constitucional es improcedente, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre estos requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho: *“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”*.

Conforme lo anterior en el caso objeto de análisis, no se ésta ante un perjuicio irremediable, por lo que se declarará en esta instancia improcedente la acción constitucional.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la acción constitucional por la ciudadana **ERIKA JANNET IDARRAGA HERRERA** identificada con C.C 52.531.488 contra la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA** –Faculta de Psicología, Dirección de Maestría en Psicología Comunitaria, por los motivos expuestos en la parte motiva.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f732862c2b804a0bbdd9f2242466c9ad6ab684280dfde03a31fc40420fed181a

Documento generado en 08/10/2020 02:49:21 p.m.